MATERIA MERCANTIL

SEXTA SALA CIVIL

MAGISTRADOS

LICS. DELIA ROSEY PUEBLA, FRANCISCO JOSÉ HUBER
OLEA CONTRÓ Y EDMUNDO VÁSQUEZ MARTÍNEZ, POR
MINISTERIO DE LEY.

PONENTE

MGDA. DELIA ROSEY PUEBLA

Recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario mercantil, excepción nulidad absoluta por ilicitud en él objeto.

SUMARIO: EXCEPCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA POR ILICITUD EN EL OBJETO. SU PROCEDENCIA. De acuerdo al artículo 1832 del código civil del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el cual establece que en los contratos civiles cada parte se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para que la validez del contrato se requieran formalidades determinadas; luego entonces, si el objeto del contrato se decreta válido, por consecuencia, no es adecuado declarar procedente la excepción de nulidad absoluta, por ilicitud en el objeto; lo que se corrobora con lo establecido también en el artículo 2226 del mismo ordenamiento civil, al señalar que la nulidad absoluta por regla general no impide que el

acto jurídico produzca provisionalmente sus efectos, los cuales podrán ser destruidos retroactivamente cuando se pronuncie el juzgador al respecto.

Ciudad de México, dieciséis de agosto del año dos mil dieciséis.

Vistos, los autos del toca número ***/2016, relativo al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por el C. Juez Sexagésimo Sexto de lo Civil esta Ciudad, en los autos del juicio ordinario mercantil, seguido por **** S.A. DE C.V. ****, en contra de MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, y

RESULTANDO:

1. La sentencia definitiva recurrida, consta de los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. Es procedente la vía ordinaria mercantil, en la que la parte actora **** S.A. DE C.V., *****, como causahabiente de los derechos de ****S.A. DE C.V. **** acreditó su acción, y en donde el MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, no justificó sus excepciones y defensas; en consecuencia.

SEGUNDO. Se condena a la demandada MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA a pagar a la actora *** S.A. DE C.V., ****, como causahabiente de los derechos de **** S.A. DE C.V. ****, o a quien legalmente sus derechos represente, la cantidad de ***** (***/100 M.N.), por concepto de rentas vencidas y no pagadas del mes de enero de dos mil doce a febrero de dos mil catorce, mas el Impuesto al Valor Agregado. Así como el pago de las rentas que se sigan generando desde el mes de marzo de dos mil catorce y hasta en tanto de cumplimiento a la cláusula vigésima cuarta del contrato base de la acción, o en su defecto, a lo convenido en el último párrafo de la cláusula denominada causas y consecuencias del incumplimiento, con la salvedad de que los bienes arrendados no se hayan consumido o no haya transcurrido su vida útil. Cantidades que deben ser cubiertas junto con su respectivo Impuesto al Valor Agregado.

TERCERO. Asimismo, se condena al pago de los intereses ordinarios y moratorios generados. Mismos que deberán ser liquidados en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo, en términos de las cláusulas tercera y quinta del contrato base de la acción, así como del “anexo de términos y condiciones”. Siendo el caso que los intereses moratorios deberán cuantificarse desde el mes de Febrero de dos mil doce.

CUARTO. Finalmente se condena a la demandada MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, a pagar a **** S.A. DE C.V., ****, como causahabiente de los derechos de *** S.A. DE C.V. ****, la cantidad que corresponda por concepto de pena convencional. Misma que deberá liquidarse en ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo en términos de la cláusula vigésima tercera y vigésima cuarta del contrato base de la acción.

QUINTO. En el entendido de que la cantidad a que fue condenado el demandado a pagar a la actora, la deberá cubrir dentro de los cinco días siguientes a aquel en el que la presente sea legalmente ejecutable.

SEXTO. No se hace especial condena en costas en esta instancia, al no actualizarse ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 1084 del Código de Comercio.

SÉPTIMO. Notifíquese.

2. Inconforme la parte demandada con la sentencia antes mencionada, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos y tramitado que fue, se citó a las partes para oír sentencia definitiva en base a los siguientes

CONSIDERANDOS:

I. La parte inconforme expresó como agravios, los que constan en su escrito presentado el nueve de junio del año dos mil dieciséis, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.

II. El primero y segundo conceptos de agravio que hace valer el apelante, de que dada la magnitud y características de la operación con-

tractual y que atento a la naturaleza jurídica del acto consignado en el contrato base de la acción, lo que considera violenta todos y cada uno de los numerales y dispositivos legales que se hicieron valer al oponer excepción de nulidad absoluta por ilicitud en el objeto, porque el Ayuntamiento sólo está facultado para convenir atento a lo que expresamente le autoriza la ley y que no estaban facultados quienes celebraron el contrato basal por parte del Ayuntamiento demandado y que por la denominación del contrato basal y su objeto considera que resulta ilegal su celebración, con lo que refiere se atenta a la ley del gobierno y la ley municipal del Estado de Sonora, resulta infundado y por ello no se viola en perjuicio del apelante el principio a la debida fundamentación y motivación para el dictado de las resoluciones judiciales, pues las excepciones de inexistencia jurídica y de nulidad absoluta por ilicitud en el objeto que hizo valer el apelante son infundadas, pues como lo advierte esta Alzada, de conformidad con la propia documental pública que exhibió el inconforme al dar contestación a la demanda, consistente en el Acta de la Sesión del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guaymas, Sonora, de diecisiete de septiembre del año dos mil dos, donde obra el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, la que hace prueba plena en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 327, en relación con el artículo 403, ambos del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad de México y que prueba en contra del propio inconforme, por haber sido exhibido con el escrito contestatorio, pues su presentación en el juicio lleva implícito el reconocimiento por parte de su oferente respecto a su plena eficacia demostrativa, no sólo por su calidad exhibida, sino atento al reconocimiento en lo que le perjudica al oferente y sobre los acontecimientos que contiene la misma, se advierte que se autorizó al Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento y Tesorero Municipal, para gestionar y suscribir

contrato de arrendamiento para la adquisición de lámparas luminarias, balastos y sus accesorios e instalación, para la renovación del sistema de alumbrado público del Municipio de Guaymas, Sonora y por ende, se colige plenamente la autorización precisamente para que el Presidente Municipal, su Secretario de Ayuntamiento y Tesorero firmaran y estuvieran facultados para comprometer al Ayuntamiento respecto de los derechos y obligaciones consignados en el contrato base, tal y como lo prevé el artículo 1832 del Código Civil de esta Ciudad, sin que el objeto del contrato se vea demeritado por el hecho que refiere el apelante, de que atento a lo pactado por las partes se establecía que el contrato debía ser considerado como de arrendamiento financiero y no “puro” atento a su intrínseca naturaleza, ya que como lo advierte esta Alzada, de conformidad con lo que prevé el artículo 1851 del Código Civil de esta Ciudad, si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas, lo que como lo advierte esta Alzada, se actualiza en la autorización por parte del Ayuntamiento apelante, en la celebración del contrato denominado de arrendamiento puro, en el que se estableció en forma clara y que no deja lugar a dudas, con independencia de su denominación, ya sea de arrendamiento puro o con cualquier otra denominación, que la intención de los contratantes fue que el contrato tuviera como objeto la adquisición de lámparas luminarias, balastos y sus accesorios e instalación para renovación del sistema de alumbrado público, lo que el municipio de Guaymas Sonora, autorizó y por ello es intrascendente la denominación que se haya otorgado al contrato, pues lo que es de capital importancia es el objeto intrínseco de la contratación, así como el acreditamiento de la capacidad debidamente autorizada de los celebrantes demandados y su legalidad al ser autorizada la operación convencida por los propios representantes constitucionales del Ayuntamiento apelante, por tanto, las supuestas violaciones que el

apelante refiere, sobre diversos ordenamientos y dispositivos legales que los rigen por parte de sus propios “representantes constitucionales”, como son el Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento y Tesorero Municipal, que celebraron el acto, o bien que no se licitó la materia del contrato base de la acción, no deben afectar la esfera de derechos del actor derivados del contrato base, pues se acreditó la debida autorización por parte del Ayuntamiento demandado al celebrar el contrato basal.

Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias bajo el rubro:

CONTRATOS. LA INTERPRETACIÓN QUE DE ELLOS REALIZA EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. La congruencia constituye uno de los principios que debe observarse en la emisión de las resoluciones judiciales, y puede ser externa e interna. La externa consiste en que la sentencia debe ser acorde a la demanda y a la contestación de la misma, resolviéndose todos los puntos litigiosos. En cambio, la congruencia interna estriba en que las sentencias no contengan consideraciones o afirmaciones que se contradigan entre sí. Ahora bien, si en un juicio la naturaleza jurídica de un contrato es motivo de controversia, en términos de lo previsto por los artículos 1792, 1793 y 1851 del Código Civil para el Distrito Federal, previo a resolverse sobre el incumplimiento de las obligaciones, el juzgador tiene la obligación de establecer la verdadera intención de los celebrantes, pudiendo incluso determinar que se trata de una interpretación diversa a las contenidas en el mismo, sin que por ello deba estimarse que existe incongruencia externa ni interna, dado que la interpretación de los contratos es a cargo del juzgador a quien compete determinar cuál fue el alcance de la voluntad de los contratantes, pues su esencia no deriva de la denominación que les confieran los celebrantes sino de las obligaciones y derechos recíprocos estipulados, y para desentrañarlos, cuando no se desprendan con claridad del sentido literal de sus cláusulas y que resulten contrarias a la intención evidente de las partes, prevalecerá ésta sobre aquéllas, sin que la determinación que así lo establezca constituya incongruencia alguna.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo ***/2002. Bell Helicopter Textron, Incorporation. 30 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretaria: María Luz Silva Santillán.

CONTRATOS, INTERPRETACIÓN DE LOS. Al establecer el artículo 1851 del Código Civil para el Distrito Federal, idéntico al 1748 del Código Civil de Nuevo León, que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas, y si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente, prevalecerá ésta sobre aquéllas, ha reconocido el principio de que la interpretación de los contratos debe limitarse a los casos en que se hace necesaria, porque si los términos del contrato son claros, la interpretación no tiene razón de ser, pues se entiende que en aquellos términos está precisamente la voluntad de los contratantes; de ahí que siendo clara la letra de un contrato, no cabe, con pretexto de su interpretación, alterar o cambiar su sentido literal.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 200/97. Grupo Nacional Provincial, S.A. 28 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: María Isabel González Rodríguez.

Véase: *Semanario Judicial de la Federación*, Quinta Época, Tomo CXXII, página 145, tesis de rubro: "CONTRATOS, INTERPRETACIÓN DE (LEGISLACIÓN DE COAHUILA).".

Por otro lado, si bien atento a lo que dispone el artículo 2226 del Código Civil para el Distrito Federal, la nulidad absoluta puede ser hecha valer por todo interesado, no menos cierto es, que en tratándose de las relaciones que derivan en la concretización de un acto jurídico bilateral, no es dable que la nulidad se declare procedente a favor de quien tiene la obligación de velar, que sus propios actos no afecten su propia esfera patrimonial o de legalidad de sus intereses, a sabiendas, que por tratarse la propia apelante de Órgano de Gobierno Municipal, estaba en la facultad y obligación de velar que

sus actos con particulares no afecten sus propias leyes prohibitivas, pues el pretendido perjuicio que arguye la apelante y que refiere con la violación de diversos ordenamientos, donde sustenta el perjuicio resentido, porque ahora considera que se celebraron en contravención del orden público, no puede afectar la esfera de derechos de actor, pues el apelante obtuvo un beneficio con la contratación, aun a sabiendas de que, desde su punto de vista, es contraria a diversas normas prohibitivas, pues esa conducta genera como consecuencia, que deba aplicarse el apotegma jurídico *nemo auditur propiam turpitudinem allegans*, es decir, que nadie escucha al que alega su propia torpeza, de acuerdo con el cual, si esa parte aceptó suscribir el contrato fundatorio de la acción con tal de recibir un beneficio, debe asumir los riesgos en que se colocó al actuar en ese sentido y por ende, las reiteradas manifestación del inconforme, respecto a que la contratación se celebró en contra del tenor de leyes, reglamentos o normas prohibitivas y de interés público y que no se licitó su objeto, y que vuelve a citar en los motivos de inconformidad, son inoperantes para entrar a su estudio, pues a ningún fin práctico llevaría su estudio, por la motivación que precede.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, el criterio siguiente:

NULIDAD ABSOLUTA DE UN ACTO JURÍDICO. AUNQUE PUEDE SER INVOCADA POR CUALQUIER INTERESADO, CARECE DE LEGITIMACIÓN LA PARTE QUE DIO LUGAR A ELLA. De conformidad con el artículo 2226 del Código Civil para el Distrito Federal, si se trata de la nulidad absoluta puede prevalerse de ella todo interesado, esto es, toda persona que pueda resentir un perjuicio derivado de la celebración del acto jurídico u obligación específica cuya nulidad se demanda, lo cual puede concretarse, por regla general, respecto de las partes o terceros. Sin embargo, aun tomando en cuenta que la nulidad absoluta de un acto jurídico —bilateral— puede invocarla cualquier interesado, lo cual comprende a las partes que intervinieron en ese

acto, no siempre es posible aceptar la regla general de que invariablemente las partes cuentan con legitimación para hacer valer tal nulidad, pues bajo ciertas circunstancias, con sustento en el elemento perjuicio resentido por la parte o cláusula contractual impugnada, no puede invocar la nulidad quien dio lugar a ella, lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte que hace valer la nulidad sólo aceptó la inclusión de una cláusula con el fin de obtener un beneficio, a sabiendas de que, desde su punto de vista, es contraria a una norma prohibitiva, pues esa conducta genera como consecuencia que deba aplicarse el apotegma jurídico *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, es decir, que nadie escucha al que alega su propia torpeza, de acuerdo con el cual, si esa parte sólo aceptó suscribir el contrato fundatorio de la acción con tal de recibir un beneficio económico, debe asumir los riesgos en que se colocó al actuar en ese sentido.

Época: Novena Época. Registro: 178409. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*. Tomo XXI, Mayo de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: I.14o.C.34 C. Página: 1491.

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 783/2004. Carrocerías Preconstruidas, S.A. de C.V. y coags. 28 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sánchez López. Secretaria: Rocío Hernández Santamaría.

De las múltiples reiteraciones del apelante, de que dada la magnitud y características de la operación contractual y que atento a la naturaleza jurídica del acto consignado en el contrato base de la acción, lo que considera, violenta todos y cada uno de los numerales y dispositivos legales que se hicieron valer al oponer excepción de nulidad absoluta por ilicitud en el objeto, y que ante la irregular denominación del contrato basal y su objeto considera que resulta ilegal su celebración, es infundado, y en razón de que dichos motivos de inconformidad ya fueron analizados como precede, se deberá de estar a lo antes resuelto en obvio de innecesarias repeticiones.

III. El tercer agravio que expresa el apelante, resulta infundado, pues de conformidad con lo pactado por las partes en el anexo denominado de “términos y condiciones número dieciocho” al contrato de arrendamiento base de la acción, la apelante manifestó su entera conformidad en la recepción de los bienes contratados, manifestando que en ese acto liberaba a la arrendadora de cualquier responsabilidad presente o futura, por ende, la pretendida falsedad ideológica propuesta resulta improcedente, pues otorgó el finiquito que correspondiera por la entrega de la mercancía convenida, con lo que se modificó la entrega de la mercancía pactada en la cláusula décima del contrato, que refiere el inconforme.

IV. El cuarto agravio que expresa el apelante, mismo que lo hace sustentar en el resultado de los agravios precedentes, son inoperantes, pues al resultar infundados ellos, éste carece de sustento lógico jurídico.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia bajo el rubro:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 720/2003. Verónica Ramírez Méndez. 11 de diciembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Ignacio Rosas González. Secretario: José Luis Estrada Amaya. Amparo directo 587/2004. Jacobo González Reyes. 10 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel

Armando Juárez Morales. Secretario: José Luis Estrada Amaya. Amparo directo 633/2004. Raúl Rosas Moreno. 9 de diciembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretario: José Luis Estrada Amaya. Amparo directo 704/2004. María de la Luz Varela Arreola. 13 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Ignacio Rosas González. Secretario: José Luis Estrada Amaya. Amparo directo 5/2005. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, antes Banpaís, S.A., Institución de Banca Múltiple. 7 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Rodríguez Soto. Secretario: Amador Muñoz Torres. Novena Época. Registro: 178784. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta* XXI, Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: XVII.1o.C.T. J/4, Página: 1154.

Visto lo anterior, es procedente confirmar en sus términos la sentencia definitiva apelada.

V. Por encontrarse el presente asunto dentro del supuesto que establece la fracción IV, del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, se condena al apelante al pago de las costas causadas en ambas instancias.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el apelante.

SEGUNDO. Se confirma en sus términos la sentencia definitiva apelada.

TERCERO. Se condena al apelante al pago de las costas causadas en ambas instancias.

CUARTO. Notifíquese con testimonio de la presente resolución, hágase del conocimiento del *a quo*.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Sexta Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, licenciados Francisco José Huber Olea Contró, Edmundo Vásquez Martínez por Ministerio de Ley y Delia Rosey Puebla, siendo ponente la última de los nombrados, ante el C. Secretario de Acuerdos licenciado Juan Ulloa Cruz, quien autoriza y da fe.

JUZGADO VIGÉSIMO EN MATERIA CIVIL DE CUANTÍA MENOR

JUEZ

LIC. MARÍA TERESA RINCÓN ANAYA

Sentencia definitiva dictada en juicio ejecutivo mercantil, obligando al pago de un título ejecutivo.

SUMARIO: OBLIGACIÓN DE PAGO DE UN TÍTULO EJECUTIVO “PAGARÉ”. SU PROCEDENCIA AUN CUANDO EL DEUDOR SEA CONSIDERADO COMO UNA PERSONA DE EDAD AVANZADA. De acuerdo al artículo 1194 del Código de Comercio, el cual establece que el que afirma está obligado a probar; por lo que debe resaltarse que la edad avanzada del deudor, por sí sola, no se puede considerar determinante para establecer que no puede cumplir con sus obligaciones de pago; en virtud de lo cual, corresponde en todo caso, acreditar que no cuenta con una fuente de ingresos o que cuenta con bienes con los cuales pueda hacer frente a las obligaciones asumidas de su parte al haber suscrito el pagaré.

Ciudad de México, veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis.

Vistos. Para resolver en definitiva los autos principales del Juicio Ejecutivo Mercantil, seguido por CELIA, en contra de CARLOS, en el expediente ***/2015, y

RESULTANDO:

1. Por escrito presentado con fecha veintiséis de marzo del año dos mil quince, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, compareció la parte actora CELIA , por su propio derecho, lo anterior, para demandar de CARLOS, las siguientes prestaciones: a) El pago de la cantidad de ***,000.00 (**** PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, resultado de los documentos base de la acción que se agregan al presente escrito en original como anexos del 1 al 20 (*sic*); b) El pago del interés legal a razón del 9% anual, así como los que se sigan causando hasta la total solución del adeudo (*sic*); El pago de los gastos y costas que se originen en el presente juicio (*sic*); fundándose para tal efecto, en las consideraciones de hecho y de derecho contenidas en el cuerpo de su demanda, las cuales, se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias y para todos los efectos legales a que haya lugar (fojas 1 a 11).

2. Con fecha seis de abril del año dos mil quince, la suscrita dictó auto mediante el cual, previno a la parte actora a efecto de que desahogara lo señalado en el mismo, bajo el apercibimiento, que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días, se desecharía la demanda interpuesta de su parte (foja 12), acto procesal, que si fue realizado por la parte actora mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este Juzgado el trece de abril del año dos mil quince (foja 14), por lo que, luego de que, dicho escrito, en cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha catorce de abril del año dos mil quince (foja 15), fue ratificado ante la presencia judicial, tal y como se desprende de la comparecencia de fecha veinte de abril del año dos mil quince (foja 16), recayó entonces al escrito de demanda, así como a la última promoción señalada previamente,

el auto de fecha veintidós de abril del año dos mil quince, mediante el cual, la suscrita admitió a trámite la demanda interpuesta en la vía y forma propuesta, ordenando requerir de pago y, en su caso, embargar y emplazar a la parte demandada Carlos, para lo cual, se ordenó girar exhorto al C. Juez Competente en Nezahualcóyotl, Estado de México, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirviera practicar la diligencia previamente citada, la cual, tuvo verificativo el catorce de mayo del año dos mil dieciséis, tal y como se desprende de la razón pormenorizada levantada por el C. Ejecutor adscrito al Juzgado Primero Mercantil de Nezahualcóyotl, Estado de México, en la que la parte demandada no realizó el pago de las prestaciones reclamadas, por lo que, practicada la diligencia conforme lo disponen los artículos 1392 a 1396 del Código de Comercio, y habiendo sido debidamente emplazada la parte demandada, se le citó para que compareciera a este Juzgado para hacer pago de las prestaciones reclamadas o para oponerse a la ejecución mediante las excepciones que tuviere para el efecto (fojas 152 anverso y reverso y 153).

3. Una vez que la parte demandada CARLOS, dio contestación a la demanda incoada en su contra, mediante escrito presentado el veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, ante la oficialía de partes de este juzgado (fojas 127 a 129), la suscrita dio vista a la parte actora por el plazo de tres días con las excepciones y defensas opuestas, esto último, mediante auto de fecha tres de junio del año dos mil dieciséis (fojas 155 y 156), la cual, si fue desahogada mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este juzgado el diez de junio del año dos mil dieciséis (fojas 157 y 158), luego entonces, admitidas las pruebas señaladas en el auto dictado con fecha catorce de junio del año dos mil dieciséis (fojas 159 a 161), y desahogadas las que se desprenden del acta de audiencia levantada con fecha primero de agosto del año dos mil dieciséis (fojas 179 y 181), cerrada la instrucción y agotado el periodo de alega-

tos, se citó a las partes para oír sentencia definitiva, la cual, se dicta al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que este juzgado es competente para resolver la presente controversia con fundamento en lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 75, 1090, 1092, 1094 y 1104 del Código de Comercio, y en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

II. Que la vía ejecutiva mercantil intentada por la parte actora, en virtud de que se basa en “veinte” títulos ejecutivos de los denominados “pagaré”, que reúnen los requisitos que dispone el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y con base en este numeral y en lo dispuesto por el artículo 167 de la misma ley, así como en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 1391 del Código de Comercio, ha resultado procedente.

III. Que atendiendo a que las partes deben asumir la carga probatoria de los hechos constitutivos de sus pretensiones y que el artículo 1194 del Código de Comercio, de conformidad con lo anterior, establece que el actor está obligado a probar su acción y el reo sus excepciones, la suscrita debe señalar que en el presente asunto, resulta procedente la acción ejecutiva mercantil ejercitada por la parte actora, ya que como se señaló con anterioridad, la misma se funda en “veinte” títulos ejecutivos de los denominados “pagaré”, los cuales, anexa a su escrito de demanda y que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1391 fracción IV del Código de Comercio, que determina que los títulos de crédito como el pagaré tienen el carácter de ejecutivos, traen aparejada ejecución, luego constituyen una prueba pre constituida de la acción ejercitada en el juicio, lo que jurídicamente significa que los documentos ejecutivos exhibidos por la parte actora, son elementos demostra-

tivos en sí mismos, por lo que, dichos documentos a criterio de la suscrita hacen prueba plena, máxime cuando a lo anterior se suma, que la parte demandada señaló al momento de dar contestación a la demanda incoada en su contra, que es parcialmente cierto el hecho número narrado por su contraparte, por lo que, de conformidad a la forma de su contestación, se tiene por confesada la parte del hecho narrado por su contraparte, en aquello sobre lo cual la parte demandada no negó o refirió como creyera que hayan tenido lugar, encontrándose desde luego, la suscripción de los documentos basales; confesión que surte efectos en términos de lo establecido por los artículos 1212 y 1287 del Código de Comercio, en consecuencia, debemos entender que los documentos base exhibidos por la parte actora y la confesión judicial previamente señalada, probaron plenamente su acción, correspondiéndole entonces a la parte demandada acreditar sus excepciones, tal y como lo señala la siguiente jurisprudencia de la antigua Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de publicación, rubro y contenido son los siguientes: Época: Quinta Época, Registro: 392525, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo IV, Parte SCJN, Materia(s): Civil, Tesis: 398, Página: 266.

TÍTULOS EJECUTIVOS. Los títulos que conforme a la ley tienen el carácter de ejecutivos, constituyen una prueba pre constituida de la acción ejercitada en juicio, y la dilación probatoria que en este se concede es para que la parte demandada justifique sus excepciones y no para que el actor pruebe su acción.; lo que no sucedió durante la secuela procesal, tal y como se expresará a detalle por la suscrita juzgadora en el siguiente considerando.

En tales condiciones, a efecto de determinar la cantidad total que, por concepto de suerte principal, debe pagar la parte demandada en juicio a favor de la parte actora, es necesario tener en consideración que de la

suma de los importes que consignan los documentos base de la acción, se desprende un adeudo cierto, líquido, mismo que se ha hecho exigible en virtud de que ha operado la cláusula de vencimiento anticipado que contienen todos y cada uno de ellos, pues el pagaré número uno, no fue pagado en la fecha señalada en el mismo para el efecto, luego entonces, en base en lo anterior y, en virtud de que, la parte demandada en juicio no acreditó durante la secuela procesal, haber pagado cantidad alguna con motivo de dicho adeudo, siendo esa su carga probatoria, pues a la parte demandada le corresponde acreditar que ha dado cumplimiento a su obligación de pago, toda vez que únicamente de esa forma puede contradecir o nulificar la "medida" del derecho que el actor como "presunción" en su favor tiene incorporada en los títulos basales, resulta entonces procedente condenar a la parte demandada CARLOS a pagar en favor de la parte actora o de quien sus derechos represente, la cantidad de ****,000.00 (*****PESOS 00/100 Moneda Nacional), por concepto de suerte principal, lo que deberá hacer dentro del término de cinco días, contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, apercibida que en caso contrario, se procederá al trance y remate de los bienes embargados y con su producto se hará pago a la parte actora en juicio.

IV. No resulta óbice a lo anterior que la parte demandada haya opuesto la excepción de que el documento basal ha sido suscrito con motivo del cumplimiento de una pensión alimenticia, misma que se hizo valer a lo largo del escrito de contestación de demanda, pues la misma resulta infundada, lo que resulta de esa forma, en virtud de que el hecho en que se hizo consistir no fue probado con medio de prueba alguno, por lo que, la parte demandada incumplió con la carga que le destina el artículo 1194 del Código de Comercio, que señala que el que afirma está obligado a probar, por tanto, no se encuentra acreditado en este juicio que los documentos basales provengan de

la obligación subyacente a la que la parte reo hace alusión; a mayor abundamiento, es de señalarse que, en todo caso, no bastaría con acreditar cuál fue la obligación subyacente que originó la suscripción de los títulos de crédito exhibidos por la accionante, ya que, la acción cambiaria que deriva de los mismos en favor del beneficiario, sólo podría haber quedado sin efectos, si además, se hubiera acreditado por el deudor que ha dado cumplimiento a dicha obligación, lo que no intentó la parte demandada, pues incluso, es de señalarse que del contenido de su contestación de demanda se desprende que reconoce que no los ha cubierto a favor de su contraparte.

En cuanto hace a la excepción de que la parte demandada es una persona de edad avanzada (setenta y ocho años), y que, no tiene trabajo actualmente, ni recibe el pago de una pensión por parte de alguna institución de seguridad social, misma que se hizo valer a lo largo del escrito de contestación de demanda, es de señalarse que la misma deviene “infundada”, en virtud de que si bien acreditó su edad con el atestado del Registro Civil exhibido de su parte, lo cierto resulta también que no fue probado con medio de prueba alguno el hecho de que la parte demandada no tenga trabajo, ni alguna otra fuente de ingresos económicos para cumplir con su obligación de pago, además que tampoco se encuentra acreditado en este juicio que no tenga bienes de su propiedad, créditos, mercancías y acciones, etc. con los que pueda responder de la obligación de pago contraída de su parte, por lo que, la parte demandada incumplió con la carga que le destina el artículo 1194 del Código de Comercio, que señala que el que afirma está obligado a probar; debiendo resaltarse que la edad avanzada de una persona por si solo no es un aspecto determinante para establecer que la misma no pueda cumplir con su obligación de pago, pues, ello no es impeditivo de que tenga una fuente de ingresos o cuente con bienes con los cuales pueda hacer frente a la obligaciones asumidas de su parte; basta para

corroborar esto último, que se observe el artículo 1395 del Código de Comercio, mismo que señala que los bienes, créditos, mercancías y acciones del deudor pueden ser objeto embargo para garantizar el pago de obligaciones.

V. En cuanto hace al pago de los intereses moratorios reclamados por la parte actora a razón del nueve por ciento anual, es de señalarse que la fracción III del artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil, en términos del artículo 1054 del Código de Comercio, establece la obligación del actor de narrar sucintamente con claridad y precisión los hechos fundatorios de sus pretensiones; luego entonces, tratándose de la prestación relativa a intereses moratorios, habrá que determinar si en el capítulo fáctico de la demanda, se encuentra narrado el hecho relativo a dicha petición o si existe remisión expresa y detallada al documento base de la acción, con la cual quede cumplido lo anterior, pues sólo si la carga señalada ha sido satisfecha en alguna de las formas precitadas por la parte interesada, será posible que forma parte de la litis, por lo cual, podrá ser materia de prueba y podrá ser tomado en consideración en la sentencia definitiva a efecto de determinar la procedencia o no de la prestación de que se trate, pues debe señalarse que ni siquiera el haber realizado el reclamo de un interés a determinada tasa porcentual y haber exhibido el documento basal, pueden subsanar ésta omisión, ya que el narrar los hechos en la forma precisada en líneas previas y exhibir el (os) documento (s) base de la acción, constituyen cargas diversas, lo que se hace claro, si se toma en cuenta que la primera de las cargas citadas, se encuentra prevista en el precepto legal citado al inicio de este considerando, y la segunda, en la fracción III del artículo 1061 del Código de Comercio; todo lo anterior, encuentra apoyo en la siguiente Jurisprudencia, cuyos datos de publicación, rubro y contenido son los siguientes: Época: Décima

Época, Registro: 2009741, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 21, agosto de 2015, Tomo II, Materia(s): Civil Tesis: PC.XXX. J/14 C (10a.), Página: 1371.

DEMANDA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA RECLAMACIÓN DE INTERESES MORATORIOS, SE INCUMPLE CUANDO RESPECTO DE ÉSTOS EL ACTOR NO SEÑALA EL HECHO RELATIVO AUN CUANDO EXHIBA JUNTO A LA DEMANDA EL PAGARÉ QUE LOS CONTIENE. El artículo 322, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios mercantiles, establece la obligación de que en la demanda se expresen con claridad y precisión los hechos en que se sustente la petición que se formule, por lo que la litis debe limitarse a determinar sobre la procedencia del pago de la prestación reclamada en la demanda que encuentre apoyo en los hechos de la misma, sin que sea posible estimar que el contenido del pagaré base de la acción que se adjuntó a ésta forma parte integrante de ella, pues su exhibición obedece a una diversa obligación prevista en el artículo 323 del citado ordenamiento legal, la cual también debe ser cumplida por el demandante, de ahí que la presentación del pagaré junto a la demanda no releva al actor de la carga procesal de exponer los hechos en que apoye su pretensión de intereses moratorios; por tanto, aunque el actor lo exhiba, en los casos en que en el apartado de hechos de la demanda, no exponga tal narración del hecho fundatorio de la prestación que reclama, ello provoca que exista una omisión total del hecho constitutivo de la acción y, por ende, que no exista punto fáctico que probar, por lo que tal documento no se podrá tomar en consideración en la sentencia y resultará improcedente dicho reclamo de intereses, dado que respecto de él no existe litis alguna en la cual se fijen los hechos que deben ser probados; sumado a que derivado de dicha oscuridad, el demandado estaría impedido para formular una adecuada defensa y aportar las pruebas para desvirtuar la petición del actor, al no poder conocer los motivos que tuvo el demandante para exigir el pago de dicha prestación; aun a pesar de que en

el apartado de prestaciones se haya mencionado que se reclaman por un porcentaje determinado a partir de que el demandado incurrió en mora y que en esta parte se hubiere remitido al documento base de la acción respecto de dichos intereses.

En tales condiciones, debemos señalar que en el caso que nos ocupa, si bien se reclamó por la parte actora de la siguiente forma: "...b) El pago del interés legal a razón del nueve por ciento anual, así como los que sigan causando hasta la total solución del adeudo..."; y que con posterioridad a lo anterior, señaló como sigue: "...Me fundo para hacerlo en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho...", también resulta cierto que de su capítulo de hechos no se desprende ninguno relativo a su prestación de intereses moratorios, ni la remisión expresa y detallada al documento basal respecto de dicha prestación, en consecuencia, al no existir hecho relativo al pacto de intereses moratorios y, como consecuencia de ello, al no formar parte de la litis, por lo cual, no puede ser tomado en cuenta en la presente resolución, consecuentemente, resulta improcedente la prestación "b" del capítulo de prestaciones del escrito de demanda de la parte actora, por tanto se Absuelve a la parte demandada de la prestación en estudio.

A mayor abundamiento, debe señalarse que el interés legal en materia mercantil, de conformidad con el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y con el artículo 362 del Código de Comercio, de aplicación supletoria a la primer ley citada con antelación en términos de su artículo 2º, resulta ser el seis por ciento anual, y no el nueve por ciento anual, pues éste último precepto legal señala una prelación u orden a efecto de subsanar omisiones, y en primer lugar, se encuentra la legislación mercantil general que el Código Civil de la Ciudad de México, mismo que en su artículo 2395 prevé la tasa de interés reclamada por la parte actora, por lo que, es de resaltarse que aun y cuando se hubiere cumplido con la carga señalada en líneas previas

relativa a la narración de los hechos de la prestación en estudio, de cualquier modo, se habría reclamado por la parte actora un interés disímil al que legalmente hubiera tenido derecho a reclamar, por ser sus documentos de naturaleza mercantil y sujetarse a los dos primeros artículos señalados en este párrafo, ante lo cual, en ese caso, también habría de Absolverse a la parte demandada en juicio.

VI. Por lo que hace al pago de los gastos y costas reclamados por la parte actora en juicio, debemos tomar en consideración que si bien es cierto que la fracción III, del artículo 1084 del Código de Comercio, dispone como imperativo legal que siempre será condenado en costas el que fuese vencido en juicio ejecutivo, y que, el presente asunto refiere a un juicio ejecutivo, sin embargo, debe señalarse que dicha condena debe ser absoluta o total, es decir, dicho supuesto procede cuando se condene al pago de la totalidad de las prestaciones reclamadas en juicio, sirve de apoyo para lo anterior, la siguiente jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resulta obligatoria para la suscrita en términos del artículo 217 de la nueva Ley de Amparo, la cual se ubica bajo el siguiente registro: Novena Época, Registro: 196634, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta* VII, marzo de 1998 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 14/98 Página: 206.

COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SU PROCEDENCIA CUANDO LA CONDENA EN EL JUICIO FUE ÚNICAMENTE PARCIAL, DEPENDERÁ DEL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR. El artículo 1084 del Código de Comercio, en su primer párrafo, establece dos presupuestos para el pago de costas en el juicio, el primero de ellos se refiere a la condena obligatoria cuando la prevenga la ley y la segunda deja al prudente arbitrio del juzgador dicha condena, a la luz de la temeridad o mala fe que se advierta en la sustanciación del procedimiento. El propio numeral en comento describe, en su tercera fracción, que pagará las costas “el que fuese condenado

en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable...” en donde el término condenado debe entenderse en su acepción absoluta o total, pues cuando se trata de una condena parcial, ésta dependerá del arbitrio judicial, y será el juzgador quien debe analizar el caso concreto para desentrañar las motivaciones que tuvieron las partes para concurrir al juicio y advertir si en alguna de ellas existió una conducta temeraria o de mala fe que deba ser castigada a través del pago de las costas.

En consecuencia, tenemos que si en el caso que nos ocupa, no se condenó a la parte demandada al pago de la totalidad de las prestaciones, puesto que no resultó procedente el pago de los intereses moratorios reclamados por el accionante en la prestación “b)” de su escrito de demanda, entonces es claro que la especie no encuadra en la hipótesis normativa señalada en líneas previas; ahora bien, no pasa inadvertido para la suscrita que la legislación mercantil prevé dos hipótesis para la condena en costas, una cuando así lo prevenga la ley, tal como se establece en el supuesto anteriormente citado, y una diversa, cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe, no obstante ello, luego de analizar las constancias de autos que tienen pleno valor probatorio en términos del artículo 1294 del Código de Comercio, la suscrita encuentra que de los datos que arrojan las mismas, no se advierten promociones inconducentes, recursos o excepciones frívolas que se encaminen a entorpecer o dilatar el procedimiento, por tanto, la suscrita encuentra, que la actuación procesal de la parte demandada en juicio no resulta temeraria o de mala fe, en tal razón, resulta procedente absolverla del pago de los gastos y costas reclamados por su contraria, sirve de apoyo para lo anterior, la siguiente jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resulta obligatoria para la suscrita en términos del artículo 217 de la nue-

va Ley de Amparo, la cual, se puede ver bajo el siguiente registro: Novena Época Registro: 177044 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta* XXII, Octubre de 2005, Materia(s): Civil, Tesis: I.11o.C. J/4, Página: 2130.

COSTAS. CONCEPTO DE TEMERIDAD O MALA FE PARA DECRETAR SU CONDENA. De conformidad con lo establecido en el artículo 1084 del Código de Comercio la condena en costas en los juicios mercantiles procede en dos supuestos: el primero, es cuando así lo prevenga la ley, y el segundo, deriva de la facultad discrecional del juzgador cuando advierta que uno de los litigantes haya actuado con temeridad o mala fe. El primer supuesto prevé la condena forzosa y se rige por las cuatro primeras fracciones y el segundo por el ejercicio del arbitrio judicial del juzgador. El numeral en comento otorga al juzgador la facultad de determinar la temeridad o mala fe examinando los casos en que proceda aplicar la sanción por esos conceptos. El arbitrio judicial no consiste en la simple y llana voluntad del juzgador, sino en una operación de entendimiento que importa el análisis de la actuación procesal de los litigantes temerarios, siendo aquellos que litigan sin justa causa. La generalidad de los juristas opinan que para que a un litigante se le tenga por temerario debe proceder con notoria mala fe, malicia notable o litigar sin justa causa. La temeridad o mala fe, entonces, puede consistir en diversos actos u omisiones del litigante, pues no sólo consiste en la falta de prueba de los hechos en que se funda la demanda o la contestación, sino en ejercitar acciones a sabiendas de ser improcedentes, oponerse a una acción sin causa justificada con pleno conocimiento de que son injustificadas, en la interposición de recursos o excepciones frívolos e improcedentes con el solo propósito de entorpecer el curso del procedimiento.

Por lo anteriormente fundado y motivado, con apoyo en los artículos 1321 y 1322 del Código de Comercio, es de resolverse y se

RESUELVE:

PRIMERO. Ha sido procedente el Juicio Ejecutivo Mercantil intentado por la actora, en donde la misma acreditó “parcialmente” sus pretensiones y la demandada no acreditó sus excepciones, en consecuencia;

SEGUNDO. Se condena a la parte demandada CARLOS, a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente la cantidad de ***** (**** PESOS 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, lo que deberá hacer dentro del término de cinco días, contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, apercibida que en caso contrario, se ordenará el trance y remate de los bienes embargados y con su producto se hará pago a la parte actora, de conformidad a lo establecido en el considerando tercero de esta resolución.

TERCERO. Resulta improcedente la prestación “b)” del capítulo de prestaciones del escrito de demanda de la parte actora, en consecuencia, se absuelve a la parte demandada CARLOS, del pago de los intereses que le fueron reclamados por su contraria, de conformidad a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución.

CUARTO. Se Absuelve a la parte demandada del pago de gastos y costas que le fueron reclamados por su contraria, de conformidad a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución.

QUINTO. Notifíquese y cúmplase.

Así, definitivamente juzgando, lo resolvió y firma la C. Juez Vigésimo de lo Civil de Cuantía Menor, licenciada María Teresa Rincón Anaya, ante la C. Secretaria de Acuerdos, licenciada Carmen Rocío Castillo Hernández, con quien actúa, autoriza y da fe.

JUZGADO VIGÉSIMO EN MATERIA CIVIL DE CUANTÍA MENOR

JUEZ

LIC. MARÍA TERESA RINCÓN ANAYA

Sentencia definitiva dictada en juicio ejecutivo mercantil, basada en dos títulos ejecutivos de los denominados “pagaré”.

SUMARIO: OBLIGACIÓN SOLIDARIA DEL AVAL RESPECTO DEL PAGO DE UN TÍTULO EJECUTIVO “PAGARÉ”. SU PROCEDENCIA AUN CUANDO NO SE HAYA REQUERIDO EN PRIMER TURNO AL DEUDOR PRINCIPAL. De acuerdo al artículo 114 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual establece que el avalista queda obligado solidariamente con aquél cuya firma ha garantizado; luego entonces, no es necesario que el primer turno, el deudor principal sea requerido de pago a efecto de que pueda procederse a demandar y a requerir de pago al aval respecto de la deuda que consignan los documentos base de la acción y denominados pagarés. Como consecuencia de lo anterior, el acreedor de dicho título de crédito puede reclamar al aval y al deudor principal el pago de la deuda al mismo tiempo, o incluso primero; lo anterior es así, toda vez que existen dos clases de “solidaridad”, esto es, la activa y la pasiva, siendo esta última en la que dos o más deudores reportan la obligación de otorgar cada uno en su totalidad la prestación debida, lo que significa que en virtud de esa figura cada uno de los acreedores o todos jun-

tos —cuando sean varios— pueden exigir el pago de la deuda de todos los obligados al mismo tiempo o de cualquiera de los deudores solidarios, por lo que el pago hecho por cualquiera de ellos al acreedor, extingue válidamente la deuda en su totalidad para con el mismo, sin que se tenga que seguir cualquier orden.

Ciudad de México, veinticuatro de enero del año dos mil dieciséis.

Vistos. Para resolver en definitiva los autos del juicio ejecutivo mercantil seguido por ****, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de LUIS ALEJANDRO y JULIO CÉSAR, del expediente **/2016 y,

RESULTANDO:

1. Con fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, compareció por escrito presentado ante la oficialía de partes común de los Juzgados de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la persona moral denominada **, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de sus endosatarios en procuración EVELIN ZABETH, AUGUSTO VINICIO, NAYELI, JUAN CARLOS, CÉSAR IGNACIO, JESÚS, RICARDO, LUIS ENRIQUE, JULIÁN ALEXANDER, FABIÁN, ISRAEL ISAAC, JOSÉ IGNACIO, MARÍA DE GUADALUPE, JORGE ABRAHAM, CHRISTIAN IVÁN, HORACIO, ALEJANDRO, MARIO ALBERTO, VERENICE, MIRIAM, MARIANA CRISTINA, CÉSAR, ELSA NAYELI, ERICK OSVALDO, ALINE y KARINA, personalidad que acreditaron éstos últimos, en términos de los endosos que obran adheridos a los títulos de crédito base de la acción, lo anterior, para demandar de LUIS ALEJANDRO y JULIO CÉSAR, el pago de las siguientes prestaciones:

A) El pago de la cantidad de ***** (***** pesos con 08/100 M.N.), por concepto de suerte principal, salvo omisión o error aritmético. (*sic*);

B) El pago de los intereses moratorios a razón del 4% (CUATRO POR CIENTO) MENSUAL, generados desde que los demandados incurrieron en mora, más los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo. (*sic*).

C) El pago del Impuesto al Valor Agregado sobre la cantidad que por concepto de intereses moratorios se generen, en términos de lo dispuesto por los artículos 1,12 y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, toda vez que nuestra representada es una prestadora de servicios. (*sic*);

D) El pago de gastos y costas que ocasione el presente juicio. (*sic*); fundándose para tal efecto en las consideraciones de hecho y de derecho contenidas en el cuerpo de su demanda, las cuales, se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias y para todos los efectos legales a que haya lugar (fojas 1 a 9).

2. Con fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, la suscrita admitió a trámite la demanda interpuesta en la vía y forma propuesta, ordenando requerir de pago y, en su caso, embargar y emplazar a la parte demandada LUIS ALEJANDRO y JULIO CÉSAR, para lo cual, se ordenó girar exhorto al C. Juez Competente en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas; diligencias que tuvieron verificativo el día veinticuatro de junio del año dos mil dieciséis (fojas 57,58 63 y 64), tal y como se desprende de las actas levantadas por la C. Actuaría adscrita al Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que, practicadas las diligencias conforme lo disponen los artículos 1392 a 1396 del Código de Comercio y habiendo sido debidamente emplazada la parte demandada en juicio, se le citó para que compareciera a este Juzgado dentro del plazo de ocho días, más cinco días por razón de distancia, lo anterior, para hacer pago de las prestaciones reclamadas o para oponer las excepciones que tuviere que hacer valer.

3. Con fecha ocho de agosto del año dos mil dieciséis, se acordaron los escritos de contestación de demanda que se encontraban reserva-

dos, dándose vista a la parte actora por el término de tres días con las excepciones y defensas opuestas por su contraparte (fojas 65 y 66), la cual, no fue desahogada, por lo que, declarado perdido el derecho de la parte actora para hacerlo valer con posterioridad, lo anterior, mediante auto de fecha veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, admitidas las pruebas que se desprenden del auto precitado (fojas 79 y 80), desahogadas aquellas que se desprenden del acta de audiencia de fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciséis (fojas 109 a 111), cerrada la instrucción y agotado el período de alegatos, se citó a las partes para oír sentencia definitiva, la cual, se dicta al tenor de los siguientes

CONSIDERANDOS:

I. Que este juzgado es competente para resolver la presente controversia con fundamento en lo establecido en los artículos 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75, 1090, 1092, 1094 y 1104 del Código de Comercio, así como el 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

II. Que la vía ejecutiva mercantil intentada por la parte actora, en virtud de que se basa en “dos” títulos ejecutivos de los denominados “pagaré”, que reúnen los requisitos que dispone el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y con base en este numeral y en lo dispuesto por el artículo 167 de la misma ley, así como en lo dispuesto por el artículo 1391 del Código de Comercio, ha resultado procedente.

III. Que atendiendo a que las partes deben asumir la carga probatoria de los hechos constitutivos de sus pretensiones y que el artículo 1194 del Código de Comercio, de conformidad con lo anterior, establece que el actor está obligado a probar su acción y el reo sus excepciones, la suscrita debe señalar que en el presente asunto, resulta procedente la acción ejecutiva mercantil ejercitada por la parte actora, ya que, cómo se

señaló con anterioridad, la misma se funda en “dos” títulos ejecutivos de los denominados “pagaré”, los cuales, anexa a su escrito de demanda y que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1391 fracción IV del Código de Comercio, que determina que los títulos de crédito como el pagaré tienen el carácter de ejecutivos, traen aparejada ejecución, luego constituyen una prueba preconstituida de la acción ejercitada en el juicio, lo que jurídicamente significa que los documentos ejecutivos exhibidos por la parte actora, son elementos demostrativos en sí mismos, por lo que, dichos documentos a criterio de la suscrita hacen prueba plena, máxime cuando a lo anterior se suma, que a los demandados LUIS ALEJANDRO y JULIO CÉSAR, se les tuvo por confesos de las posiciones que previamente fueron calificadas de legales, dentro de las cuales, especialmente las marcadas con los números uno y nueve de los pliegos que fueron exhibidos para el desahogo de la prueba confesional a su cargo, se les formularon básicamente en el sentido de que el día diecisiete de junio del año dos mil catorce, suscribieron en su calidad de deudor principal y aval respectivamente, el pagaré número de folio ****, por la cantidad de ***** (** pesos con ** moneda nacional) y el pagaré número de folio ****, por la cantidad de **** (**** pesos **** moneda nacional); confesiones que al no haber sido desvirtuadas con medio de prueba alguno, surten efectos en términos de lo establecido por el artículo 1289 del Código de Comercio; en consecuencia, debemos entender que los documentos exhibidos por la parte actora probaron plenamente su acción, correspondiéndole entonces a la parte demandada acreditar los hechos en que hicieron descansar sus excepciones, tal y como lo señala la siguiente jurisprudencia de la antigua Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resulta obligatoria para la suscrita en términos de lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo, cuyos datos de publicación, rubro y contenido son los siguientes: Época: Quinta Época, Registro: 392525, Instancia: Tercera

Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo IV, Parte SCJN, Materia(s): Civil, Tesis: 398, Página: 266.

TÍTULOS EJECUTIVOS. Los títulos que conforme a la ley tienen el carácter de ejecutivos, constituyen una prueba preconstituida de la acción ejercitada en juicio, y la dilación probatoria que en este se concede es para que la parte demandada justifique sus excepciones y no para que el actor pruebe su acción.; lo que no sucedió en la especie, tal y como quedará debidamente precisado en el siguiente considerando.

Por lo anterior, crea plena convicción en la suscrita que está debidamente probada la acción de la parte actora en juicio, luego entonces, a efecto de determinar la suerte principal que debe pagar la parte demandada, es necesario tener en consideración que si bien es cierto, que de la suma de las cantidades que consignan por su parte cada uno de los títulos de crédito base de la acción, se obtiene como gran total, la cantidad de **** (** pesos con ** moneda nacional), también resulta cierto que la parte actora reclama únicamente de su contraparte la cantidad de **** (**** pesos con ** moneda nacional), señalando esencialmente para el efecto, que en cuanto hace al pagaré que se identifica por tener el número de folio ****, reclama únicamente el pago de la cantidad de **** (**** pesos con **** centavos moneda nacional), y que, en cuanto hace al pagaré que se identifica por tener el número de folio ****, reclama el pago de la totalidad de la cantidad que consigna dicho documento, esto es, la cantidad de **** (** pesos con **** centavos moneda nacional), por lo que atento a ello, debe señalarse que de la suma de las dos cifras antes señaladas, efectivamente se obtiene la cantidad cierta, líquida y exigible reclamada por el accionante; luego entonces, toda vez que la parte demandada no acreditó durante la secuela procesal, haber pagado cantidad mayor a la reclamada por su contaría, siendo esa su carga probatoria, tal y como se puede apreciar claramente de

la siguiente jurisprudencia, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que en términos de lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo, resulta obligatoria para la suscrita y cuyos datos de publicación, rubro y contenido son los siguientes: Época: Novena Época Registro: 163772, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXII, septiembre de 2010, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 62/2010, Página: 136:

PAGARÉ. CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA LA CARGA DE PROBAR QUE YA REALIZÓ EL PAGO TOTAL DEL ADEUDO O BIEN QUE, EN SU CASO, ES MENOR AL RECLAMADO, AUN CUANDO SEA UNA CANTIDAD INFERIOR A LA CONTENIDA EN AQUÉL. En un juicio ejecutivo mercantil en el que se ejercita la acción cambiaria directa derivada de un pagaré, conforme a los artículos 151 y 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y 1391 del Código de Comercio, para que el juzgador despache auto de ejecución debe revisar, de oficio, si es procedente o no la vía intentada, mediante el análisis del documento base de la acción, para verificar que satisfaga los requisitos a que se refiere el artículo 170 de la indicada Ley, entre ellos, que contenga una cantidad cierta, líquida y exigible. Ahora bien, la certeza y liquidez de la deuda no se pierde por el hecho de que el pagaré señale una cantidad mayor a la reclamada, sin constar en él la anotación de haberse realizado algún pago parcial, como lo estipula el artículo 130 del citado ordenamiento; pues atendiendo a los principios de incorporación y literalidad que rigen a los títulos de crédito, lleva incorporado el derecho del actor hasta por el monto que consigna, estableciendo la presunción de que ésta es la medida del derecho del accionante. Esas características del pagaré, como título de crédito, hacen que represente una prueba preconstituida del derecho literal que contiene, cuyo ejercicio sólo está condicionado a su presentación. Por tanto, en caso de que por cualquier circunstancia, el actor reclame una cantidad menor a la mencionada en ese documento, corresponde al demandado la carga de probar, en el momento procesal oportuno, que ya realizó el pago del adeudo, o bien que, en

su caso, éste es menor al reclamado; pues sólo de esa manera podrá contradecir o nulificar la presunción del derecho del actor incorporado en el título. Además, la circunstancia de que el accionante decida cobrar una cantidad inferior, es algo que no causa perjuicio alguno al demandado, toda vez que, en principio, se encuentra obligado a pagar aquella cantidad.

Entonces, resulta procedente condenar a la parte demandada LUIS ALEJANDRO y JULIO CÉSAR, a pagar en favor de la parte actora o de quien sus derechos represente, la cantidad de **** (**** PESOS **/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, lo que deberá hacer dentro del término de cinco días, contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, apercibida que en caso contrario, se procederá al trance y remate de los bienes embargados y con su producto se hará pago a la parte actora en juicio.

IV. En cuanto hace a la excepción de falta de requerimiento de pago al deudor principal, misma que fue opuesta por el C. JULIO CÉSAR Aval, es de señalarse que la misma deviene “infundada”, ya que si bien es cierto que la hizo consistir “medularmente” en que no se niega a pagar, pero, que para ser requerido de pago, primero debe hacerse lo propio respecto del C. LUIS ALEJANDRO —deudor principal—, lo que señala resulta de esa forma, en razón de que únicamente firmó como “aval” el documento base de la acción, también resulta cierto que en el caso que nos ocupa no es necesario que, en primer turno, el deudor principal sea requerido de pago a efecto de que pueda procederse a demandar y a requerir de pago al aval respecto de la deuda que consignan los documentos base de la acción, pues no debe perderse de vista que la obligación asumida por este último es “solidaria”, tal y como se desprende del artículo 114 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual señala que: “El avalista queda obligado solidariamente con aquel cuya firma ha garantizado”; ahora bien, a efecto de hacer más

claro lo anterior, es necesario explicar que existen dos clases de “solidaridad”, esto es, la activa y pasiva, siendo esta última, en la que dos o más deudores reportan la obligación de otorgar cada uno en su totalidad la prestación debida, lo que significa que en virtud de esa figura cada uno de los acreedores o todos juntos —cuando sean varios—, pueden exigir el pago de la deuda de todos los obligados al mismo tiempo o de cualquiera de los deudores solidarios, por lo que, el pago hecho por cualquiera de ellos al acreedor extingue válidamente la deuda en su totalidad para con el mismo, sin que tenga que seguirse ningún orden; luego entonces, es claro que el artículo precitado de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, prevé una solidaridad pasiva entre deudor principal y aval, lo que trae como consecuencia, que en un juicio que se base en un documento de los denominados títulos de crédito en el que aquella persona que garantice la obligación sea un “aval”, el acreedor puede reclamar a éste y al deudor principal el pago de la deuda al mismo tiempo, o incluso primero únicamente al aval, ante lo cual, cualquiera de ellos en su totalidad o ambos en una parte proporcional, pueden hacer el pago voluntario de la deuda o, en su caso, ser ejecutados uno u otro por la totalidad o ambos proporcionalmente por una parte del adeudo principal y de sus accesorios. Luego entonces, devienen también infundadas las consideraciones del excepcionista en el sentido de que no debe pagar intereses moratorios al no haber incurrido en mora, en razón de que a su juicio primero debía requerirse de pago al C. LUIS ALEJANDRO, esto último, por las mismas razones y fundamento vertidos para que no exista la necesidad de que el deudor principal sea requerido en primer término de la suerte principal.

En cuanto hace a la excepción de pago opuesta por el demandado JULIO CÉSAR, la cual, se desprende de los hechos que conforman su escrito de contestación de demanda, es de señalarse que la misma deviene “infundada”, pues si bien es cierto que la hizo consistir “básicamente”

en que ha pagado ocho parcialidades —lo cual, cabe resaltar resulta contradictorio con la excepción estudiada en el párrafo anterior, en la que el propio excepcionista consideró que primero debía requerirse a su contraparte antes de que tuviera la obligación de realizar algún pago, y por otra parte, señala haber pagado parte del adeudo del documento basal—, también resulta cierto que no aportó al presente controvertido ningún medio de prueba que acreditara su aseveración, por tanto, desatendió la carga de la prueba que le reserva el artículo 1194 del Código de Comercio, que señala en la parte conducente que el reo debe probar sus excepciones y que el que afirma está obligado a probar.

En cuanto hace a la excepción de garantía opuesta por los demandados LUIS ALEJANDRO y JULIO CÉSAR y falta de acción y derecho opuesta únicamente por este último demandado, las cuales, se desprenden de los hechos y capítulo de excepciones que conforman sus escritos de contestación de demanda, es de señalarse que las mismas devienen “infundadas”, pues si bien es cierto, que las mismas se hicieron consistir “básicamente” en que los documentos base de la acción fueron suscritos en garantía de un contrato de prenda, ante lo cual, es considerado por la parte excepcionista que la parte actora carece de acción y derecho para reclamar sus prestaciones, también resulta cierto que el hecho de que uno o varios pagarés sean suscritos en garantía del pago del algún bien, no es algo que trascienda a la acción cambiaria, a menos, que se acredite el pago que haya dado cumplimiento total o parcial a la relación que le dio origen a los títulos de crédito, lo que resulta de esa forma, ya que, no debe perderse de vista que un título de crédito no tiene como única función fungir como un instrumento de préstamo a mediano o corto plazo, pues tiene entre otras funciones: transportar y almacenar el dinero; agilizar el pago de obligaciones líquidas, facilitar la transferencia de fondos, fungir como un instrumento de garantía del pago de un servicio o de un bien etc. por lo que, de cualquier manera

indefectiblemente habrá un acto jurídico con el cual se encuentre vinculado, sin que ello trascienda en principio a la acción cambiaria que se ejercite mediante un documento de esa clase. Por lo que, si bien los demandados exhibieron por su parte copia simple de un contrato, y que estas copias se adminiculan con uno de los documentos basales, esto es, con aquel que señala “pagaré de seguro automotriz”, mismo que se infiere, se relaciona con el otro documento basal, pues fueron firmados en la misma fecha y tiene números de folio muy cercanos, de lo que se puede llegar a inferir que los documentos basales si provienen de una garantía respecto de conceptos relativos a un autofinanciamiento, también resulta cierto que ello no trasciende de forma alguna a la acción cambiaria ejercitada en el presente juicio, pues no se acreditó haber dado el debido cumplimiento a la relación subyacente que dio origen a los documentos basales, ni tampoco al pago de dichos documentos.

En cuanto hace a la excepción de que no se han negado a pagar la deuda, es de señalarse que no basta esa simple negación, pues la parte demandada se obligó a hacerlo en los plazos señalados en los pagarés basales, tal y como se desprende de su texto, no siendo viable entonces que con esa sola manifestación se encuentre eximida de haber dado cumplimiento en la forma pactada.

En cuanto hace a la excepción de que los demandados no se obligaron a pagar el interés por mora a razón del cuatro por ciento mensual, es de señalarse que de los documentos basales Si se desprende dicha obligación, por lo que, debe de cumplirse en los términos pactados, lo anterior, de conformidad con el artículo 5º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En cuanto hace a la excepción de que no deben pagar el Impuesto al Valor Agregado, misma que fue opuesta por los demandados LUIS ALEJANDRO y JULIO CÉSAR ,la cual, se desprende de los hechos que conforman su escrito de contestación de demanda, es de señalarse que

la misma deviene “infundada”, pues si bien es cierto, que la misma se hizo consistir básicamente en que la parte actora reclama dicha prestación ostentándose como prestadora de servicios, pero, que no acredita tal carácter, también resulta cierto que los títulos de crédito se rigen por el principio de literalidad previsto por el artículo 5° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo que implica que el texto del documento no genera la necesidad de buscar en otra fuente externa un soporte de las obligaciones que se consignan en el título, por lo que, si la parte demandada se obligó a pagar el Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses moratorios en los propios documentos basales, entonces dicha obligación debe ser cubierta en sus términos. Sirve de base a sentido contrario la siguiente tesis cuyos datos de publicación, rubro y contenido son los siguientes: Época: Novena Época, Registro: 184374, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, tomo XVII, abril de 2003, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.384 C. Página: 1153.

VALOR AGREGADO. ANTE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, ES IMPROCEDENTE EL PAGO DE ESE IMPUESTO SI NO SE PRECISÓ LITERALMENTE EN EL TÍTULO DE CRÉDITO LA OBLIGACIÓN RELATIVA. De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 5o., 152 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se desprende que cuando se ejercita la acción cambiaria directa en la vía ejecutiva mercantil, únicamente puede demandarse el cumplimiento de las obligaciones de pago contenidas literalmente en el título de crédito relativo, al tenor de la autonomía característica de ese tipo de documentos, que los abstrae de la causa que dio origen a la deuda; esto es, en principio sólo puede reclamarse el importe del título, los intereses moratorios al tipo legal, los gastos del protesto y demás gastos legítimos que se hayan precisado en el documento, sin que en ninguna de las hipótesis descritas en el segundo de esos preceptos se encuentre contemplado que a través de la acción en comento se pueda demandar, sin haberse pactado expresamente, el pago del

impuesto al valor agregado que, en su caso, se haya causado con motivo del acto que le dio origen a la relación de crédito o por los intereses pactados en el título. Sobre tales premisas es patente que resulta improcedente la prestación relativa al pago del impuesto al valor agregado si tal concepto no se precisó en el texto del título de crédito relativo, por más que materialmente se haya causado ese tributo y esto pudiera presumirse de otros datos o pruebas, ya que no es materia de la acción cambiaria directa la causa de la obligación de pago, por lo que no es necesario revelar ni probar la relación jurídica subyacente que dio origen al título base de la acción, es decir, únicamente se demanda el cumplimiento de las obligaciones de pago contenidas literalmente en el título de crédito relativo; de ahí que no es procedente examinar siquiera la actualización de alguna de las hipótesis que como hecho imponible del tributo establece el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

En cuanto hace a la excepción de que el automóvil al que hace alusión la parte demandada le fue consignado con motivo de un hecho de tránsito y que no le fue devuelto, es de señalarse que lo anterior no se encuentra acreditado en el presente juicio con ningún medio de convicción, razón por la cual, resulta innecesario entrar al estudio de las consideraciones relativas a un hecho no acreditado.

V. En cuanto hace al pago del interés moratorio causado desde la fecha en que la parte demandada incurrió en mora, más los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo a razón del cuatro por ciento mensual, es de tomar en consideración que el segundo párrafo del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece que los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento y, en defecto de ambos, al tipo legal; que del texto que conforma la literalidad de los pagarés exhibidos como base de la acción, efectivamente se desprende que las partes pactaron un interés moratorio a

razón del cuatro por ciento mensual, ante lo cual, el caso que nos ocupa se subsume dentro de la primer hipótesis normativa señalada con antelación; y que de lo anterior no se desprende violación alguna a derechos humanos; luego entonces, toda vez que los demandados no acreditaron en el presente juicio haber pagado la totalidad de las parcialidades que se obligaron a cubrir respecto del título de crédito que se identifica por tener el número de folio ****, ni tampoco acreditaron haber pagado el título de crédito que se identifica por tener el número de folio ****, esto último, el día señalado para el efecto, es inconcuso que los mismos se han constituido en mora, consecuentemente, resulta procedente condenarlos a pagar en favor de la parte actora o de quien sus derechos represente, el interés moratorio causado y que se siga causando a razón del cuatro por ciento mensual (4%), contado a partir del ocho de noviembre del año dos mil catorce, respecto del pagaré que se identifica por tener el número de folio ****, el cual, en principio, deberá calcularse sobre la cantidad adeudada respecto del mismo, esto es, sobre la cantidad de \$***** (***** pesos con sesenta y cuatro centavos moneda nacional) y contado a partir del dieciocho de junio del año dos mil quince, respecto del pagaré que se identifica por tener el número de folio ****, el cual, en principio, deberá calcularse sobre la cantidad adeudada respecto del mismo, esto es, sobre la cantidad de **** (**** pesos con **** centavos moneda nacional); interés moratorio, que deberá cubrirse hasta la total solución del adeudo que consigna por su parte cada uno de los pagarés base de la acción, de conformidad con los artículo 5° y 174 párrafo segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Cantidad que será liquidada y cuantificada en ejecución de sentencia según lo dispone el artículo 1348 del mismo Código de Comercio.

Lo anterior, resulta en ese sentido, ya que, si bien es cierto, que del texto que conforma el título de crédito que se identifica por tener el número de folio ****, se puede advertir que las partes convinieron el pago

del mismo en parcialidades, por lo que, de conformidad con el artículo 79 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, aplicable de manera expresa al pagaré de acuerdo con el diverso 174 de la legislación en comento, las letras de cambio con otra clase de vencimiento, diversas a las señaladas en las cuatro fracciones que conforman dicho precepto legal, y que refieren a la vista, a cierto tiempo vista; a cierto tiempo fecha; a día fijo; o con vencimiento sucesivos, se entenderán siempre pagaderas a la vista por la totalidad de la suma que expresen; dicho documento resulta exigible a la vista en su totalidad, lo cierto resulta también que para computar el interés moratorio, éste debe computarse a partir del día hábil siguiente a la fecha de la parcialidad indicada en el pagaré que no fue cubierta por el obligado, siendo esto último de esa forma, ya que, dicho documento contiene una cláusula de vencimiento anticipado, la cual señala que a falta de pago de una o más parcialidades se haría exigible en su totalidad. Sirve de apoyo para lo anterior la siguiente jurisprudencia, que resulta obligatoria para la suscrita en términos de lo establecido en el artículo 217 de la nueva Ley de Amparo, misma que se encuentra visible bajo el siguiente rubro: 160,281 [J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, febrero de 2012, Tomo 1; Pág. 602.

PAGARÉ CON VENCIMIENTOS SUCEIVOS Y VENCIMIENTO ANTICIPADO. ES PAGADERO A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE LA PARCIALIDAD QUE NO FUE CUBIERTA POR EL OBLIGADO. En términos del artículo 81 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que establece que para computar los términos legales no debe comprenderse el día que sirve como punto de partida, ante el vencimiento anticipado de los pagarés por el incumplimiento de alguna de las parcialidades pactadas previamente, los plazos para computar el interés moratorio deben computarse a partir del día hábil siguiente a la fecha de la parcialidad indicada en el pagaré que no fue cubierta por el obligado. Por su parte, a los pagarés con vencimientos sucesivos, por tener fecha cierta de vencimiento, no les resulta aplicable la regla prevista en el artículo

79 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es decir, no pueden tenerse como pagaderos a la vista, pues ello sería atentar contra el principio de literalidad que rige en los títulos de crédito, ya que las partes estipularon claramente que serían pagaderos a cierto tiempo fecha. Contradicción de tesis 275/2010.

Por lo que, en ese orden de ideas, tenemos que si la parte actora respecto del pagaré en comento, señaló desde su escrito inicial de demanda, que los demandados le adeudan treinta y ocho parcialidades, de las cuarenta y dos mensualidades que se obligaron a cubrir en su favor, de lo que se colige que la parte demandada pagó cuatro mensualidades relativas del mes de julio al mes de octubre, ambos del año dos mil catorce, e incumplió con su obligación de pago a partir de la mensualidad número cinco correspondiente al siete de noviembre del año dos mil catorce, luego entonces, si ésta no acreditó durante la secuela haber cubierto dicha mensualidad, ni tampoco haber pagado cantidad alguna posterior a la misma, entonces es inconcuso que en el caso que nos ocupa el interés moratorio, en términos del artículo 81 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que señala que ni en los términos legales ni en los convencionales se computará el día que les sirva como punto de partida, debe empezar a computarse respecto del documento en turno a partir del ocho de noviembre del año dos mil catorce.

Por otro lado, en cuanto hace al pagaré que se identifica por tener el número de folio M 43614, es de señalarse que el interés moratorio respecto de dicho documento debe empezar a computarse a partir del día siguiente al de su fecha de vencimiento, puesto que el mismo señala en su literalidad que su pago debía ser realizado el diecisiete de junio del año dos mil quince, lo que implica que de conformidad a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 79 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, éste resulta ser de vencimiento a día fijo, lo que significa que su importe fue exigible en su totalidad en la fecha señalada en

el documento para su pago, en consecuencia, si la parte demandada no acreditó durante la secuela procesal haber realizado el pago en el día indicado en el pagaré en comento, es inconcuso que el interés moratorio, en términos del mencionado artículo 81 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, debe empezar a computarse respecto de este documento a partir del día siguiente a aquel, esto es, a partir del día dieciocho de junio del año dos mil quince.

VI. Por lo que hace a la prestación reclamada por la accionante, consistente en el pago del Impuesto al Valor Agregado causado sobre los intereses moratorios, es de tomar en consideración que los títulos de crédito como el pagaré, se rigen por el principio de literalidad contenido en el artículo 5° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que implica que el beneficiario de un título no puede exigir al deudor algo que no esté previsto en su texto, pues derivado de éste, el universo de obligaciones y derechos creado con la expedición de un título, no puede, ni debe tener otra interpretación que la realizada respecto de lo que esté contenido de manera escrita en el documento; por tanto, es de tomar en consideración, que si bien es cierto que del texto consignado en los pagarés exhibidos como base de la acción, se desprende que las partes en juicio establecieron el pago de un interés moratorio más los impuestos aplicables, sin hacer referencia expresa al Impuesto al Valor Agregado, también resulta cierto que dicha expresión es suficiente para tener por cierto que el deudor principal y sus avales, si se obligaron a pagar el mismo en cada uno de dichos documentos, tal y como lo señala la siguiente tesis, cuyo criterio comparte la suscrita y cuyos datos de publicación, rubro y contenido son los siguientes: Época: Décima Época, Registro: 2006637, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7*, junio de 2014, Tomo II, Materia(s): Civil, Tesis: I.8o.C.15 C (10a.), Página: 1785.

PAGARÉ. CONFORME AL PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA, ES PROCEDENTE EL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RESPECTO DE LOS INTERESES MORATORIOS GENERADOS, CUANDO DE SU TEXTO SE ADVIERTE EN CUALQUIER FORMA LA VOLUNTAD DEL DEUDOR EN ESE SENTIDO. De conformidad con los artículos 5o., 152 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al intentarse la acción cambiaria directa pueden reclamarse las prestaciones que en el mismo documento se indican, esto es, el importe del pagaré, los intereses moratorios desde el día de su vencimiento, los gastos del protesto y los demás gastos legítimos que se hayan precisado en el documento, entre ellos, el pago del impuesto al valor agregado, cuando éstos han sido expresamente contemplados en el texto del propio documento; sin que el pacto sobre dicho impuesto dependa de determinada formalidad, pues conforme al principio *pacta sunt servanda*, contenido en el artículo 78 del Código de Comercio, en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso hacerlo, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Así, tal obligación se desprende de la frase que dice “más los impuestos aplicables”, como expresión consignada en ese título de crédito que indudablemente se refiere a la aceptación de esa carga tributaria.

En tal razón, debemos entender que la parte demandada en juicio si se obligó a cubrir en cada uno de los pagarés, para el caso de incumplir en su obligación de pago, no sólo el interés moratorio, sino también el impuesto al valor agregado que se genere sobre dicho interés, en consecuencia, se condena a la parte demandada en juicio LUIS ALEJANDRO y JULIO CÉSAR, a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente, el Impuesto al Valor Agregado generado sobre los intereses causados y que se causen por el tiempo en que se encuentre en mora respecto de los títulos de crédito base de la acción. Cantidad que deberá liquidarse en ejecución de sentencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio.

VII. Por lo que hace al pago de los gastos y costas demandados por la parte actora, tomando en consideración que el presente asunto se ajusta a lo establecido en la fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio, se condena a la parte demandada al pago de los gastos y costas que su contraria haya causado con motivo del presente juicio, por lo que, los mismos deberán ser cuantificados en ejecución de sentencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio.

Por lo anteriormente fundado y motivado con apoyo en los artículos 1321 y 1322 del Código de Comercio, es de resolverse y se

RESUELVE:

PRIMERO. Ha sido procedente el juicio ejecutivo mercantil intentado por la actora, en donde la misma acreditó los hechos constitutivos de sus pretensiones y las excepciones de la parte demandada resultaron infundadas, en consecuencia;

SEGUNDO. Se condena a la parte demandada LUIS ALEJANDRO y JULIO CÉSAR, a pagar en favor de la parte actora o de quien sus derechos represente, la cantidad de **** (**** pesos **/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, lo que deberá hacer dentro del término de cinco días, contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, apercibida que en caso contrario, se procederá al trance y remate de los bienes embargados y con su producto se hará pago a la parte actora en juicio.

TERCERO. Se condena a la parte demandada LUIS ALEJANDRO y JULIO CÉSAR, al pago en favor de la parte actora o de quien sus derechos represente, del interés moratorio causado y que se siga causando a razón del cuatro por ciento mensual (4%), contado a partir de que incurrió en mora y hasta la total solución del adeudo, de conformidad a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución.

CUARTO. Se condena a la parte demandada LUIS ALEJANDRO y JULIO CÉSAR, al pago en favor de la parte actora o de quien sus derechos represente, del Impuesto al Valor Agregado generado sobre los intereses causados y que se causen por el tiempo en que se encuentre en mora respecto de los títulos de crédito base de la acción, de conformidad a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución.

QUINTO. Se condena a la parte demandada, al pago de los gastos y costas causados por el presente juicio, mismos que se cuantificarán en ejecución de sentencia en términos del considerando séptimo de esta resolución.

SEXTO. Notifíquese y cúmplase.

Así, definitivamente lo resolvió y firma la C. Juez vigésimo de lo Civil de cuantía menor, licenciada María Teresa Rincón Anaya, ante la C. Secretaria de acuerdos, licenciada Carmen Rocío Castillo Hernández, con quien actúa y da fe.